RESOCAL
RED DE SOLIDARIDAD CON AMERICA LATINA

LA DESBANDADA.
Por Xavier Lasso.

A eso estamos asistiendo en los estertores del gobierno de Moreno, intentar algún calificativo no tiene sentido, a semejante personaje ya nada le cabe, ni siquiera creo que guiñapo lo abarque. Funcionarios indolentes, como el que fuera ministro de salud, Zevallos, ahora en Estados Unidos, canceladas todas sus cuentas en redes, como queriendo desembarazarse de su nefasto pasado; otras muy cínicas, como María Paula Romo, también en Estados Unidos, dicen que Washington, a la que ahora le invade un profundo silencio; hay también los de mirada abyecta, miserables, como el que fuera ministro de economía, Martínez, ese que le negó recursos a la salud en medio de la pandemia; o los de mirada corta , ver borricos, sin condumio, como Roldán, muy probablemente en España al amparo de su padre, embajador de Ecuador en esa península.

Pero los remolinos de tierra también vienen del remedo de "periodismo" que tanto aupó las tropelías de Moreno. Ha dejado la pantalla Janet Hinostroza, es que ya se le agotó el negocio de las entrevistas.
Mención aparte para Tania Tinoco que ahora se pregunta, ante tanto deterioro: ¿qué nos pasó? Pasó, mientras miraban a otro lado, haciéndose los locos, que el Ecuador se caía a pedacitos, asaltado por Moreno y sus colaboradores más cercanos, Michelena en primera línea.
O la desfachatez de Diego Oquendo saltándose la fila, típico de las inmoralidades cotidianas, amparado en sus dichos lame todo, como Moreno campeón de la libertad de expresión, al recibir la restitución de unas frecuencias, que fueron sometidas a una auditoría que desveló enorme corrupción en su reparto.

¿Qué les pasó? Pasó que se quedaron sin siquiera un mínimo de referencias éticas porque se perdieron en el discurso del odio puro. Mientras todo se hacía añicos, se remitieron a su propio ombligo y, ¡pum! las cárceles estallaron, micro como que, de todas maneras, es el reflejo de la sociedad entera. En las cárceles cercenaron, decapitaron, motosierras, amoladoras fueron usadas; en la sociedad muchos lo perdieron todo, lo más preciado: la dignidad. Ese "periodismo" con dientes afilados, y uñas de colores, muy largas y puntiagudas, fue el arma de todos los días, hasta cosechar las tempestades que nos ha dejado con esta sensación distópica.
Ahora toca, con paciencia, con respeto y solidaridad, compasión también, volver a levantar una idea de patria que se construya desde la rica diversidad de nuestra gente: cholos, negros, indios, mestizos y con la mira fijada sobre todo en los pobres, es que estar con la historia es estar con ellos. Basta de ese suelo expoliados por unos ricachones capaces de todo, violentos, hipócritas, farsantes. Sus afanes de poder, poder total, hasta los ha vuelto esperpento puro, tan ensimismados en su fiesta de disfraces.

No somos eso, y pasa que vamos al encuentro del futuro.

Bolsonaro, Moreno y la "independencia" del Banco Central
por Juan Fernando Terán

En la última semana de febrero, el presidente Jair Bolsonaro sancionaba una ley para asegurar "la independencia" del Banco Central en Brasil. Esto ocurrió en el mismo día en el cual el presidente Lenin Moreno enviaba una ley con un propósito similar al parlamento ecuatoriano. La coincidencia, sin embargo, refleja algo más que el simple azar. Veamos.

1). El pretexto cambia, el objetivo es el mismo

Brasil no está dolarizado ni tiene un tipo de cambio fijo. Tampoco existe sistema monetario que esté en peligro. Esas cantaletas no funcionan en ese país. Por ello, para poder justificar la aprobación de una ley para "asegurar" la independencia del Banco Central, el cuento utilizado fue otro.

Bolsonaro y sus periodistas celebraban la independencia del Banco Central con frases ridículas debido a su retórica fantasiosa. Como si provinieran de "una capsula del tiempo" recién destapada pero enterrada a mediados de los 1980s, sus frases pregonaban la independencia del Banco Central como si fuese el primer paso para que Brasil deje de ser un país subdesarrollado. ¡Por fin!, ¡Ya era tiempo!, ¡Ahora sí!

"Muito bom poder presenciar este momento" decían los intelectuales neoliberales y argumentaban sonrientes que la independencia del Banco Central eliminará el populismo económico, evitará la intromisión de la política en la macroeconomía y facilitará el control de la inflación.
Todo "muito bom", ¿verdad? No importa el idioma que utilice, el discurso neoliberal se estructura vendiendo ilusiones y generalidades… en espera de que nadie las analice. En eso basa su poder.

2). Los neoliberales prometen separar la política de la economía

Pero hay que reconocerlo, los neoliberales brasileros tienen un mejor manejo doctrinario que los lacayos ecuatorianos que hacen venia al Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los argumentos para "asegurar" la independencia de la banca central, aquellos señalaban que el "ciclo político" tiene una temporalidad diferente al "ciclo económico". Entre otras cosas, esto significa que los intereses y objetivos de la clase política suelen tener un horizonte temporal mucho más corto que los intereses y objetivos de quienes hacen política económica mirando en el largo plazo.

El argumento es tan viejo como los primeros discursos enunciados por Milton Friedman, el economista monetarista que estuvo detrás de la implementación del neoliberalismo a principios de los 1970s en Chile. Al igual que en aquella época, sin embargo, la supuesta "despolitización" de la conducción macroeconómica es una mentira miserable.

Para separar el ciclo político del ciclo económico, los neoliberales brasileros generaron una ley que les permitirá elegir el directorio del Banco Central en un momento diferente al momento de la posesión del presidente de la República. De esta manera, además de que el próximo presidente brasilero tendrá un papel decorativo en la definición de políticas monetarias, el próximo directorio "independiente" del Banco Central permanecerá en funciones años después de que el capitán Bolsonaro salga del poder en 2022. Coincidencias… ¿no?

3). Todos los caminos conducen al FMI… aunque lo nieguen

El Consenso de Washington no ha desaparecido pues solo se ha disfrazado como "sentido común". Por eso, la gente se traga frases absurdas pero dirigidas al engaño colectivo. Por eso, mientras Brasil o Ecuador siguen soportando la indolencia de gobernantes que dejan morir a los que deban morir, los ciudadanos no se detienen a reflexionar que:

a). Las leyes para otorgarle independencia al Banco Central no eliminan la política, sino que la ocultan. En lugar de que los miembros del directorio del Banco Central sean electos a través de mecanismos públicos, aquellos serán electos en las reuniones "privadas" a las cuales serán invitados los grupos de presión, los banqueros hegemónicos o los empresarios monopólicos. En esas reuniones a puerta cerrada se realizará el cabildeo. Allí quienes tengan "más billete" impondrán su voluntad comprando votos y lealtades. ¿Acaso esto no es político?

b). La independencia del Banco Central facilitará el movimiento de capitales hacia afuera de los países. No se requiere mucha ciencia para inferir que un Banco Central "independiente" de cualquier gobierno no será una institución controlada por los productores. ¿O acaso Usted se imagina a la federación brasilera de fútbol controlada por quienes juegan básquet? ¡Por favor!

Quienes controlen los directorios podrán establecer tasas de interés referenciales, manejar las reservas monetarias, disponer niveles de encajes bancarios, definir políticas para el uso de dinero virtual, influir en la creación secundaria de dinero y muchas otras cosas más…. Entre las cuales, obviamente, estará el ocultamiento de los problemas que tengan algunos bancos privados y la realización selectiva de "salvatajes" bancarios. Pero eso no es todo.

En su forma actual, la supuesta "independencia" de los bancos centrales es un mecanismo para facilitar la salida de capitales desde los países no desarrollados. Por eso, a pesar de todas las evidencias en su contra, el FMI promueve este tipo de normativas.

Sea o no consecuencia de la ceguera ideológica, la "independencia" del Banco Central les permitirá a los conglomerados empresariales hacer lo que Mauricio Macri y sus amiguitos hicieron en Argentina, a saber, poner sus capitales a buen resguardo en paraísos fiscales y hacer que el Estado cubra el faltante de liquidez.

copyright © Resocal.se

La independencia del Banco Central es un mecanismo para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Esta es y será siempre la formula básica del neoliberalismo.

4). No vengan con el cuento de que incentivarán la producción. En Brasil, Ecuador o Japón, los neoliberales promueven la "independencia" del Banco Central so pretexto de luchar contra la corrupción. ¿Cómo?

En cualquier idioma, el cuento más o menos es el siguiente. Los gobiernos son adictos para endeudarse para financiar políticas que no inciden ni inmediata ni directamente en "los equilibrios macroeconómicos". Entre esas políticas se encuentran aquellas dirigidas a áreas como educación, salud y protección social. Para cortar de raíz esta "manía populista", el Banco Central y sus recursos no deben ser involucrados en nada de lo que el Ministerio de Finanzas haga o deje de hacer.

En su fórmula más general, es decir aplicable a cualquier país, aunque no exista el pretexto criollo de "la defensa de la dolarización", el cuento de la independencia del Banco Central se justifica aduciendo que la política monetaria debe privilegiar el control de la inflación. Todo lo que haga o deje de hacer el Banco Central deberá estar relacionado con la gestión de la inflación.

Lindo, ¿verdad?… solo si Usted no reflexiona sobre lo que significa el "inflation targeting". Desde hace décadas, la discusión económica versa sobre cuáles deben ser las funciones de la banca central. Para quienes defienden los intereses de los banqueros, el control de la inflación es todo lo que en realidad importa. Así de simple. Y lo es no porque a ellos les importe verdaderamente que los ciudadanos padezcamos precios muy altos o contracción de precios. Ubiquémonos… el "inflation targeting" no es un objetivo planteado por almas piadosas.

Al definir al "control de la inflación" como el único objetivo real de la acción de la banca central, aquellos buscan evitar que la sociedad utilice la moneda para otro objetivo que no sea asegurar las ganancias financieras. Por eso, el discurso neoliberal borra toda la historia del debate sobre la discusión entre "objetivo inflación" u "objetivo producción" … Y lo hace para hacerle creer a la gente que el Banco Central y la política monetaria solo tienen que ver con la estabilidad de precios.

Una vez que la gente se traga este cuento, entonces aquellos pueden presentar como "natural" que un gobierno electo democráticamente no tenga nada que ver con la gestión de la moneda, que los directorios del Banco Central duren más tiempo que un período presidencial o que la reserva monetaria solo se utilice para garantizar "liquidez".
La dominación política se basa en difundir representaciones falsas de la realidad, pero presentándolas como verdades naturales. Por eso, nuestros neoliberales criollos NO NOS DIRAN aquello que economistas heterodoxos como Joseph Stiglitz han recordado una y otra vez.

La supuesta "independencia" de la Reserva Federal no ha evitado que Estados Unidos sea un país altamente endeudado donde la inflación no ha desaparecido y el dólar perdió y seguirá perdiendo su valor. En Estados Unidos, en cambio, el control privado de la Reserva Federal si ha permitido algo muy jugoso para quienes usufructúan del trabajo de otros… el salvataje bancario… una y otra vez.
¿O acaso Usted cree que quienes controlen el directorio "independiente" del Banco Central privilegiarán los intereses de los trabajadores y los productores?
Semejante creencia, en portugués, se llama "conto de fadas".

Elecciones en El Salvador

Oficialismo se convierte en primera fuerza del parlamento

Un giro tendrá la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1º de mayo. Ayer, luego de las elecciones legislativas y municipales, el partido Nuevas Ideas apuntalaba a convertirse en la nueva primera fuerza política de El Salvador.

Con menos del 12% de actas de escrutinio preliminar procesadas, el partido afín al presidente Nayib Bukele gozaba de una tendencia a favor. Estos resultados lo encaminaban a hacerse con el control de la Asamblea Legislativa, que actualmente tiene a ARENA como la fracción legislativa con más escaños.

Para tener los resultados totales, el Tribunal debe procesar 8,451 actas de escrutinio preliminar. Al cierre de esta nota, el portal de divulgación de resultados mostraba el procesamiento de 999 actas.

Aunque en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) hubo apoyo tecnológico en mesa, los resultados, especialmente de los lugares con mayor cantidad de votantes, llegaban a cuentagotas.

Antes de que comenzaran a divulgarse los primeros resultados, Bukele y otros funcionarios del Gobierno ya celebraban la victoria de su partido.

Minutos después de las nueve de la noche, el Tribunal en pleno dio una conferencia de prensa en la que reiteraron que el sistema de registro y transmisión de resultados es confiable.

"El TSE cuenta con la ayuda de una empresa local que tiene un sistema muy sofisticado para la corrección de cualquier amenaza", dijo Eduardo Lozano, integrante de la comisión técnica informática del Tribunal.

Minutos antes de esas afirmaciones, el secretario de innovación de la Presidencia, Vladimir Handal, denunciaba que el Tribunal no le daba acceso a todo el proceso de recepción y procesamiento de actas y llamó a los militantes de Nuevas Ideas a defender el voto.

Si bien en la elección de diputados, Nuevas Ideas tenía una ventaja, el panorama cambiaba en cuanto a los concejos municipales. En este caso, la ventaja del Nuevas Ideas respecto a otros institutos políticos no estaba tan marcada.

Al cierre de esta nota, el Tribunal divulgó datos que indicaban que solo 395 actas habían sido procesadas, de un total de 8,451 a nivel nacional.

Afluencia de votantes

En las elecciones de ayer la población enfrentaba una situación adversa que antes no había estado, repetían los magistrados del Tribunal y hacían referencia al covid-19 y al hecho de que salir de casa implica exponerse a la enfermedad.
A pesar de la condición sanitaria, la afluencia de votantes fue un aspecto que destacó la magistrada presidenta del Tribunal, Dora Esmeralda Martínez.

En un informe que brindó antes de las 10:00 PM, el Tribunal indicó que más del 51 % de la población apta para votar asistió a las urnas. "Ante la pandemia llevábamos el reto de que la gente no quisiera salir a votar, pero hasta el momento hemos superado otras elecciones con el 51 % de participación. Eso indica que la pandemia no fue un pretexto para seguir fortaleciendo la democracia", dijo Martínez.

El porcentaje de asistentes a la votación es un poco más bajo que la última elección presidencial, pero más alto que las últimas legislativas de 2015 y 2018, según los datos recolectados por LPG Datos en una muestra aleatoria hecha en los centros de votación a nivel nacional. Cabe destacar que la investigación tiene un margen de error de 2.2%.

El inicio de la jornada electoral estuvo opacado porque en decenas de centros de votación hubo problemas para la integración de las Juntas.
En la madrugada del domingo, Bukele denunció que Nuevas Ideas y Cambio Democrático no tenían credenciales para que sus miembros se incorporaran en las mesas de votación.

Magistrados del Tribunal confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que, a última hora, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, ambos partidos pidieron cambios de más de 3,000 credenciales, y que a eso se debió el retraso en el inicio de la jornada de votación en diferentes puntos del país.

TSE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES2021
Diputaciones al Parlacen, Asamblea Legislativa e integrantes de Concejos Municipales

RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
https://elecciones2021.tse.gob.sv/

Argentina y México proponen un nuevo eje progresista en América Latina y el Caribe
Por Pedro Brieger

copyright © Resocal.se

Las visitas de Estado tienen múltiples dimensiones y hay diferentes criterios para evaluarlas más allá de las afinidades políticas, entre otros, la duración de una visita y las actividades que se realizan. Muy lejos en el recuerdo quedan las giras de semanas, como la que realizó el presidente de Francia Charles de Gaulle en 1964 por 10 países de América del Sur a lo largo de 26 días. Ahora el tiempo apremia, todo es breve y las visitas de Estado suelen durar horas, apenas para un saludo y la firma de algún documento protocolar. No es el caso de la visita de Alberto Fernández al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La excusa del viaje a México fue la conmemoración del bicentenario de la independencia mexicana y específicamente el día de la bandera, el 24 de febrero. Fernández permaneció durante tres días y se pudo percibir una gran empatía con AMLO, que lo invitó a varias actividades por fuera de lo estrictamente protocolar. De hecho, fue el primer presidente extranjero en participar de la famosa “mañanera”, la conferencia matutina de AMLO. Además, habló en el Senado, fue declarado huésped ilustre de la Ciudad de México por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y visitó el laboratorio Liomont para conocer el lugar donde están desarrollando vacunas de manera conjunta. Como si esto fuera poco acompañó a AMLO al acto central por el día de la bandera en Iguala el 24 de febrero.

Vale la pena recordar que López Obrador accedió a la presidencia el 1 de diciembre de 2018 mientras en la Argentina gobernaba Mauricio Macri, claramente alineado con la política exterior de los Estados Unidos y que propugnaba el abandono de los mecanismos de integración regional. El hecho fortuito que unió a Fernández con López Obrador un mes antes de que asumiera formalmente la presidencia fue el golpe de Estado contra Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Entre ambos lograron salvarle la vida a Morales.

Ya en la presidencia desde el 10 de diciembre de 2019 Fernández estrechó el vínculo con el gobierno de México buscando una mayor integración regional a través de proyectos conjuntos, el relanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) y el Grupo de Puebla como ejes políticos. De esta manera se diferenció de los gobiernos de derecha de la región que no impulsan mecanismos de integración latinoamericanos sino todo lo contrario; salvo, cuando se trata de atacar de manera conjunta al gobierno de Nicolás Maduro, como si este fuera el único tema de interés en América Latina.

Desde ya que no extraña que los grandes medios de comunicación opositores a ambos gobiernos hayan puesto el énfasis en todo lo que podía provocar roces y distanciamiento entre los dos presidentes. Sin embargo, sus discursos, las imágenes de cordialidad entre ambos, sus elogios mutuos y el documento conjunto de 15 puntos son más que elocuentes. Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador tienen una visión estratégica común respecto de la necesidad de una verdadera integración regional de América Latina y el Caribe, el acceso equitativo a las vacunas, las críticas a la Organización de Estados Americanos (OEA) comandada por Luis Almagro, e incluso de la cooperación espacial a través de una Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE). La tarea no es sencilla, pero para comenzar se necesita voluntad política. Y ambos la tienen.

La nueva marcha hacia el cambio político en Haití

Por Federico Larsen

El de Jovenel Moïse parecería un gobierno destinado a caer en breve. Pero, en Haití, aun lo que parece inevitable puede tomar rumbos inesperados.

Desde abajo del chasis quemado de una moto asomaban solamente un par de piernas, también carbonizadas, a pocos centímetros de la vereda de la avenida que marca el comienzo del barrio de Delmas, en el suroeste de Puerto Príncipe. Algunos vecinos comentaron a los periodistas de las agencias internacionales que se acercaron al lugar, que el hombre había sido asesinado de un balazo, y luego habían prendido fuego el cadáver. Fueron las pandillas de Moïse, agregaron.

A pocas cuadras seguía desarrollándose la enésima multitudinaria manifestación para pedir la renuncia del presidente. Un pequeño grupo se había separado del resto de la marcha para atacar con una lluvia de piedras a una decena de policías preparados para reprimir. Los uniformados contestaron con balas de plomo a los cascotes, hiriendo a varios de los que participaban en la protesta.

La oposición había logrado llevar a la calle una cantidad inesperada de personas ese domingo. Una semana antes, el 7 de febrero, había vencido el mandato del presidente conservador Jovenel Moïse sin que se celebren nuevas elecciones, y el juez Joseph Mécène Jean Louis, primero en la línea sucesora según la actual constitución, aceptó el cargo de “presidente encargado de la transición de ruptura”. A pesar de los muertos y las balas de plomo, el engranaje para un nuevo cambio de rumbo en Haití parece haberse puesto en marcha.

La delincuencia es política

“Haití es un país que tiene un nivel de delincuencia común realmente muy bajo. La cultura campesina del país siempre fue muy refractaria al delito. En el país hace unos 25 años ni se conseguían armas. Pero hay muy altos niveles de violencia en clave política”, nos explica Lautaro Rivara, sociólogo y periodista, miembro de la Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití. “Hace algunas décadas hay grupos delincuenciales que son armados directamente por el poder político.

Es bastante común que senadores, exsenadores, ministros, presidentes o expresidentes armen sus pequeños grupos de choque, que con los años han ido creciendo en armas, financiamiento y poder con un objetivo bien concreto que es aterrorizar a la gente”.

Marie Yolène Gilles, del grupo de defensa de derechos humanos Fondasyon Je Klere (FJKL), en su declaración ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en enero de 2020 estimó que existen en el país cerca de 150 bandas criminales activas. Las más importantes se asientan en los barrios populosos de la capital Puerto Príncipe, aquellos que, al mismo tiempo, conforman los distritos electorales de mayor peso.

Allí son frecuentes las incursiones de colectivos armados que en más de una ocasión terminan en masacre. En agosto pasado veinte personas fueron asesinadas en el barrio obrero de Bel-Air, y las casas de los sobrevivientes fueron incendiadas, obligando sus moradores a levantar un campamento de emergencia en la explanada que rodea el palacio de gobierno. La masacre más reconocida realizada por las pandillas vinculadas al poder político ocurrió el 13 de noviembre de 2018 en el bastión opositor de La Saline. 71 personas fueron asesinadas en esa ocasión, once mujeres violadas en grupo, 400 casas incendiadas.

Una investigación difundida por el gobierno de los EE. UU. meses más tarde confirmaba la presencia de representantes departamentales y allegados al presidente Moïse entre los “arquitectos” de la masacre. De hecho, Fednel Monchery, ex Director General del Ministerio del Interior, y Rigaud Duplan, ex Director Departamental del Oeste renunciaron a sus cargos por su responsabilidad en la masacre.

“Es muy común ver cosas difíciles de tipificar en términos de criminalidad común”, explica Rivara. “Un grupo de delincuentes entra en un mercado populoso, a plena luz del día, dispara a quemarropa a la gente, tira tiros al aire, hace algo muy vistoso, pero no roba absolutamente nada. Y así hay un montón de hechos en ese sentido”.

Las “pandillas de Moïse”

Uno de los hombres más conocidos en esta imbricación entre crimen organizado, instituciones y partidos políticos en Haití es Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, expolicía involucrado en las masacres de Grand Ravine en 2017, La Saline en 2018 y otra correría sucedida en Bel Air en 2019. En junio de 2020 Chérizier logró crear el “G9 an Fanmi” (G9 y familia), una alianza entre pandillas de la capital que, según analistas y opositores, de hecho, cogobierna Haití.

Era al G9 el grupo al que se referían los testigos que hablaban de “las pandillas de Moïse” frente al cadáver carbonizado en Delmas, el pasado domingo. Aquellos barrios que mayor participación han tenido en la seguidilla de protestas antigubernamentales de los últimos cuatro años han sido en general los más castigados por la acción de las pandillas.

El accionar represivo y coordinado de estos grupos ilegales se hizo más visible a partir de mediados de 2018, cuando estalló el escándalo por el “Petrocaribe Challenge”. Haití fue incluida en el plan diseñado por el gobierno de Hugo

copyright © Resocal.se

Chávez para facilitar el acceso de los países de la cuenca caribeña a los hidrocarburos venezolanos.

Los países miembros de Petrocaribe recibían ingentes cantidades de petróleo a precios fuertemente reducidos, a pacto de que la diferencia que cada gobierno ahorraba con respecto al precio de mercado fuese invertida en programas de desarrollo social dentro del país beneficiado. Haití entró al acuerdo en 2007, y en poco más de 10 años se ahorró 3.800 millones de dólares (más de un tercio de su PIB actual) en gastos de combustible y préstamos, que sin embargo no se usaron para los fines que preveía el acuerdo.

Miles de personas salieron a las calles. Las manifestaciones contra la corrupción y el mal gobierno tocaron su ápice entre febrero y junio de 2019, y se intensificaron nuevamente entre septiembre y diciembre debido al desabastecimiento de combustible y la crisis económica que le siguió.

Fue en la represión de esas manifestaciones que se consolidó la unión entre delincuencia y poder político: decenas de personas murieron a machetazos y disparos en ataques a sus barrios o durante las manifestaciones contra la corrupción. Un reciente informe de la ONU documentó 133 muertes y 698 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por fuerzas policiales y pandillas ligadas al gobierno en las protestas llevadas a cabo entre el 6 de julio de 2018 y el 10 de diciembre de 2019.

La crisis de 2019 debida al escándalo de Petrocaribe se resolvió con el enésimo cambio de primer ministro y el enésimo préstamo del Fondo Monetario Internacional para sanar temporalmente las arcas del estado. Pero tras unos pocos meses otro escándalo volvió a llevar varios barrios de la capital a las calles. En enero de 2020 Moïse decidió cerrar el parlamento, ya que debido a la inestabilidad vivida a finales de 2019 no se habían podido realizar las elecciones legislativas previstas para noviembre de ese año. Moïse de hecho gobierna por decreto desde entonces, y el parlamento sigue cerrado.

Tras las grandes movilizaciones de protesta que estallaron en la primera mitad de 2020, las pandillas volvieron a actuar. Entre el 23 y el 27 de mayo atacaron los barrios de Font-Rouge, Chancerelles, La Saline, Tokio y Fort-Dimanche con el apoyo de agentes de policía, causando la muerte de 34 personas según la Réseau National de Défense des Droits de l'Homme (RNDDH) y la congresista norteamericana Maxine Waters. Dos semanas después, "Barbecue" anunció la creación del G9 con un video en las redes sociales.

¿Se acabó la soga?

La conducta de Moïse, conocido como "Nèg banann", el "muchacho de los plátanos" por su actividad como empresario bananero, hasta ahora no había tenido aún ninguna repercusión en el ámbito internacional. Su rápido reflejo para romper relaciones con Venezuela, pocos meses después del escándalo Petrocaribe, reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y el alineamiento con la política de Trump en el Caribe le permitió una cierta protección a pesar de los evidentes atropellos cometidos en la mayoría de los aspectos de la vida política doméstica.

A fines de noviembre de 2020, Haití fue el primer país americano en abrir una embajada en Sahara Occidental [1], reconociendo de hecho la soberanía marroquí sobre ese territorio tal como Trump había impuesto pocos días antes. Pero el cambio de inquilino en la Casa Blanca, y sobre todo el crecimiento de los reclamos opositores, cada vez más extendidos inclusive dentro de las instituciones del estado, obligaron al presidente a modificar su plan de acción.

A mediados de 2020 anunció la intención de reformar la constitución para dar una configuración institucional al país que permitiera enfrentar las continuas crisis. La actual constitución haitiana fue el fruto de la breve primavera democrática que el país vivió tras la larga dictadura de François Duvalier, conocido como Papa Doc, al poder desde 1956 y sucedido luego por su hijo, Jean Claude, apodado Baby Doc, que mantuvo el régimen hasta 1986.

Para contrastar la creación de una nueva desastrosa dictadura como las de los Duvalier, los constituyentes haitianos dispusieron un complejo sistema institucional, de pesos y contrapesos, que mezcla el típico presidencialismo americano con elementos típicos de los sistemas parlamentarios más difusos en Europa. El presidente, de esta manera, no es jefe de gobierno sino jefe de Estado, y el parlamento debe aprobar al primer ministro que el presidente designa.

Un diseño complejo y que resultó poco sólido ante los vaivenes políticos en Haití: desde la vuelta de la democracia el país tuvo 19 presidentes -de los cuales sólo dos concluyeron su mandato- y 34 primeros ministros, además de ocho golpes de estado y tres intervenciones militares extranjeras. La reforma planteada por Moïse se justificó justamente en la necesidad de afrontar desde lo institucional esta inestabilidad.

Sin embargo, a dos meses de la fecha fijada para el referéndum aprobatorio de la nueva carta magna (mecanismo siquiera previsto por la constitución vigente), el borrador de la reforma sigue trabajándose en secreto. El calendario electoral presentado por Moïse, además, fue elaborado por un Consejo Electoral Provisorio nombrado por decreto por el mismo presidente, sin reconocimiento por parte de la oposición, y prevé la celebración de elecciones generales el próximo 19 de septiembre.

Tras anunciar la reforma constitucional, Moïse aprobó dos decretos el 26 de noviembre pasado "para el fortalecimiento de la seguridad pública". El primero extiende la tipificación del delito de "terrorismo" a hechos de simple vandalismo callejero, que podrían ser castigados con hasta 50 años de cárcel. Y el otro instituyó la Agencia Nacional de Inteligencia, un organismo de espionaje y represión cuyos agentes no pueden ser perseguidos ni enjuiciados, permitiendo de hecho la comisión de todo tipo de abusos con impunidad garantizada.

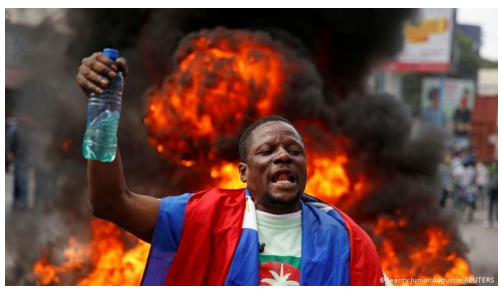
Hasta el Core Group, integrado por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, el Representante Especial de la Organización de Estados Americanos y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, ha expresado sus críticas frente a estas medidas. En un comunicado publicado pocos días después de la aprobación de las normas, sostiene que "no parecen ajustarse a ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos".

Otra decisión que generó reacciones adversas a nivel internacional fue la reducción de las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, el órgano encargado de velar sobre el uso de dinero público e investigar casos de corrupción, a un rol meramente consultivo. "Los fallos del Tribunal Superior de Cuentas y lo Contencioso Administrativo (…) no serán vinculantes para la Comisión Nacional de Contratación Pública, ni para las autoridades del Poder Ejecutivo", sostiene el decreto también firmado en noviembre pasado, y que generó repudio internacional.

Las manifestaciones del último mes en Puerto Príncipe pusieron aún más en dudas la tolerancia de la que gozaba el gobierno de Moïse en el extranjero. La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, calificó de "autoritarias" y "antidemocráticas" las recientes acciones del gobierno frente a las nuevas protestas desatadas desde enero.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, preparó un informe que presentará ante el Consejo de Seguridad la semana que viene en el cual, según reportan medios internacionales, recopila 66 puntos críticos que vive actualmente el país, y que sólo podrían enfrentarse con nuevas elecciones transparentes y democráticas.

El estallido del 2021



El principal detonante de la serie de multitudinarias manifestaciones contra el actual gobierno, a pesar de los riesgos que esto conlleva, comenzadas en enero gira entorno a la polémica acerca de la duración del mandato presidencial de Moïse. La actual constitución prevé que un presidente se mantenga en el cargo por un periodo de cinco años.

Moise fue elegido en 2017, pero las elecciones en que se consagró eran en realidad una repetición de las de 2016, anuladas tras la constatación de fraudes en diferentes distritos. La oposición interpreta que el periodo presidencial que Moïse

copyright © Resocal.se

ocupa debe ser considerado desde las fallidas elecciones de 2016, habiendo concluido el pasado 7 de febrero de 2021.
Además, según la carta magna de 1987, ante situaciones extraordinarias el parlamento podría recortar de un año el mandato presidencial, cosa que los opositores aseguran que el parlamento tenía intención de hacer antes de que el presidente lo cerrara.

Así, miles de haitianos dieron por terminado el mandato constitucional de Moïse el pasado 7 de febrero, y con el parlamento cerrado y la acción del G9 en connivencia con la policía lo consideran ya a pleno título un dictador. Ese día hubo manifestaciones y pronunciamientos de distintos actores políticos en el país. Entre ellos, diversos magistrados se posicionaron en favor de la interpretación opositora que entiende que Moïse está usurpando un cargo cuyo mandato ya es caduco.

Tres de ellos fueron sustituidos y arrestados ese mismo domingo junto con otras 20 personas acusadas de golpismo, a pesar de que la constitución prohíba al presidente la destitución y designación de jueces. La oposición nombró entonces al juez más antiguo de la Corte de Casación, como prevé la constitución, como presidente interino.
Joseph Mécène se comprometió a organizar elecciones libres y limpias, pero recientemente añadió que antes se debe avanzar en la consolidación de una conferencia nacional soberana, una reforma constitucional, el fortalecimiento del poder judicial y del sistema electoral, así como el restablecimiento de la seguridad.

Una agenda bastante ambiciosa, que por ahora cuenta con el apoyo de un movimiento heterogéneo y desorganizado, cuyo único acuerdo parecería reducirse a la destitución de Moïse. “Hay una oposición muy fuerte por parte de gente que no está organizada”, apunta Rivara en este sentido.

“Esa relación que existe en todos lados entre un componente de movilización orgánica y otro más bien inorgánica es muy diferente a otros países. Hay movilizaciones de cientos de miles de personas donde las estructuras realmente organizadas, con militantes, sindicatos y movimientos son realmente minoritarias. Después hay partidos políticos tradicionales, como los que hacen referencia al Sector Democrático y Popular, lo más parecido a una oposición institucional que encabeza el abogado André Michel.

Y está el campo de los movimientos sociales y los sindicatos más combativos como los que se encuentran en el Foro Patriótico. Son movimientos territoriales, de mujeres, campesinos e inclusive religiosos che representan la oposición más radical y transformadora. Esos son los tres grandes componentes de estas movilizaciones, el inorgánico que es mayoritario, el más formal e institucional y el de los movimientos sociales”.

Aquí no pasa nada

“No dramaticemos. No tenemos una situación tan grave como se tiende a proyectar. Es una situación controlada. La situación está bajo control. Hoy es mejor que ayer. Mañana será mejor que hoy”, afirmó el canciller haitiano, Claude Joseph, la misma noche del 14 de febrero, a pocas horas de que apareciera un cadáver carbonizado en plena calle del barrio de Dalmás y la policía reprimiera con bala de plomo una marcha, hiriendo entre otros al tercer periodista desde el comienzo de la crisis.

A pesar de la crítica situación que se vive en el país, las fuerzas que detienen el gobierno mantienen su plan de reforma constitucional y promesas de elecciones, desestimando toda crítica por considerarla parte de un plan golpista. Moïse tiene de su lado aquella inercia que empuja la política haitiana a mantenerse en un estatus quo en el cual lo que podría considerarse una excepcionalidad en cualquier parte del mundo se asume cuasi como rutinario.

La violencia política, ya al orden del día al tiempo de las temibles Tonton Macoutes, las milicias del régimen de los Duvalier que aterrorizaron a la población durante treinta años, la corrupción, la pobreza. El gobierno de Haití, el país más pobre de América parece justificar lo que sucede a partir de la inevitabilidad de ciertos problemas históricos.

Cualquier estudio sobre Haití pivotea sobre los mismos temas: deuda, corrupción, intervención extranjera, cooperación internacional. Haití cuenta con una estructura económica profundamente dependiente desde los tiempos de su independencia, castigada por la Francia iluminista con una multa que recién pudo terminar de pagar en 1947. La necesidad constante de financiación llevó a todos los gobiernos haitianos a endeudarse aún más con bancos norteamericanos y europeos, que ante la posibilidad de una posible falta de pago no dudaron en recurrir a sus gobiernos.

Así en 1915 Estados Unidos invadió Haití tras una de las tantas revueltas que había acabado con el asesinato del entonces presidente Guillaume Sam, y puso bajo su control toda su estructura económica. Al dejar el país en 1934 siguió manteniendo una influencia preponderante sobre las elecciones políticas y económicas. Fue también gracias al beneplácito de Washington que los Duvalier lograron sostenerse en el poder por casi tres décadas.

Tras su derrocamiento (también ocurrido un 7 de febrero), Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier se llevó al exilio en Francia unos 900 millones de dólares del erario. Para 1996 Haití debía 22.800 millones de dólares, y recién a partir de allí el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comenzaron a incluirlo en la Lista de Países Pobres Muy Endeudados [2].

Mientras tanto Haití se había convertido en el principal receptor de Ong’s y organizaciones humanitarias de América, una característica que a la larga resultó siendo más negativa que de ayuda. Vista la larga historia de casos de corrupción, los fondos enviados por las organizaciones internacionales son gestionados directamente por sus representantes en el país y no por el gobierno, sosteniendo de hecho la pobreza estructural del estado y financiando proyectos según criterios discrecionales de los donantes privados y los voluntarios en el lugar.

Un nuevo golpe de estado en 1991 truncó uno de los experimentos más interesantes del progresismo latinoamericano comandado por el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide, primer presidente elegido democráticamente por el pueblo haitiano. Vuelto al poder en 2001, fue nuevamente derrocado por un golpe en 2004, y la inestabilidad política desatada a partir de esa fecha funcionó de justificativo para una nueva intervención extranjera.
Esta vez bajo la órbita de la ONU a través de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH). El papel de estas fuerzas internacionales envueltas en múltiples escándalos merecería un capítulo aparte. Parte de sus 10.000 soldados fueron responsables de introducir un brote de cólera que afectó a 780.000 personas y provocó más de 10.000 muertes.

En 2016, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asumió la responsabilidad y pidió perdón al pueblo haitiano. Los soldados de la MINUSTAH también fueron acusados de violaciones sexuales y de forzar a menores a prostituirse a cambio de comida. Más de 2.000 mujeres denunciaron los abusos recibidos y hay por lo menos 265 niños nacidos de esas violencias [3] a quienes Naciones Unidas negó inclusive estudios de ADN para averiguar la paternidad.

El terremoto de enero de 2010, además, empeoró el panorama. Cerca de 300.000 personas murieron y otro millón y medio perdió su hogar, en una catástrofe que a la larga sirvió para alimentar aún más el modelo de dependencia del país de los capitales extranjeros, sea a través de préstamos multilaterales y privados, sea por vía de las donaciones de las ONG.

El derrotero de Haití en las últimas décadas es el contexto necesario para entender la parsimonia que el actual gobierno quiere demostrar a nivel internacional ante la crisis actual. Su plan es de largo aliento y ofrece una salida razonable a mediano y largo plazo del atolladero en que se encuentra el país desde hace prácticamente 34 años.
Y al mismo tiempo, como bien explica Rivara [4], apunta a lograr una normalización institucional que calce en el proyecto del bloque conservador y oligárquico que Moïse representa. Por el otro lado, un sector democrático extremadamente heterogéneo y poco organizado impulsa una resistencia que cada vez obtiene mayores ecos a nivel nacional e internacional. Su fortaleza, la calle, se mantiene firme a pesar de la represión, pero el proyecto para el futuro institucional del país sigue, una vez más, en una nebulosa.

copyright © Resocal.se

Chile | La corrupción "democrática"
Por Juan Pablo Cárdenas S.

Cuando en nuestras sociedades suceden crímenes terribles como los que se perpetran contra los niños y los ancianos, los legisladores compiten en proponer leyes cada vez más drásticas contra los culpables. Hablan de "aplicarles todo el peso de la ley" y hasta llegan a alentar que los propios afectados ejerzan acciones de venganza, como desnudar y torturar en público a los delincuentes comunes, práctica que se está haciendo muy frecuente en Chile ante la ineptitud policial y judicial.

Pero la corrupción "democrática" siempre busca derroteros para proteger a los más vergonzosos criminales. Para discurrir atenuantes a favor de los que delinquen apropiándose de los caudales públicos, sobornando a los políticos, explotando a los trabajadores y en franco abuso a los consumidores.

Bullados casos de parlamentarios y ministros que se dejaron sobornar por los más poderosos empresarios después de algunos meses están quedando en nada o aplican sanciones que en nada se compadecen con la cuantía de tales delitos. Varios episodios de empresas y cadenas de farmacias que se coludieron durante varios años para elevar ficticiamente los valores de los fármacos de primera necesidad finalmente terminaron pagando multas que no representan nunca más de un 15 o 20 por ciento de todo lo defraudado.

Ni qué decir de las concesiones de obras públicas otorgadas a empresas nacionales y extranjeras que terminaron cobrando mucho más que lo que indicaron en la licitación respectiva, cuando no terminan en un verdadero fiasco como el famoso puente sobre el Cau Cau que por años no ha podido ejecutarse y terminarse como fuera prometido.

Otros verdaderos elefantes blancos se reparten en toda nuestra geografía sin que sus obras se concluyeran o quedaron suspendidas al momento en que sus ejecutores completaron el robo de los materiales de construcción e imposiciones de sus operarios para gozar, enseguida, de perpetua impunidad.

En Argentina se reconoce que los ilícitos cometidos por políticos para administrar las pocas vacunas conseguidas por este país para inmunizar a toda su población no contemplan sanciones efectivas en el Código Penal. Lo que ocurre también con los audaces que se "saltaron la fila" para vacunarse antes de lo debido, a pesar de que diariamente mueren por cientos los que pudieron salvarse de haberles aplicado oportunamente esta inmunización. Una situación que se repite en Ecuador y otras naciones ante la indignación popular.

Sabemos, asimismo, que los abusos y delitos del peronismo y de otras expresiones del llamado izquierdismo o progresismo latinoamericano siguen sin aclararse y tampoco condenar, aunque sea a unos pocos responsables. Por el contrario, los que hasta ayer eran imputados e incluso llegaron a ser privados de libertad por un tiempo hoy están todos libres y promueven, incluso, asociaciones continentales para protegerse mutuamente y proseguir sus andanzas. Practicando, por supuesto, las mismas malas costumbres de los gobiernos de derecha y consolidado alianzas con los poderes fácticos que desde la oposición tanto criticaban. Ejemplo claro de esto es la forma en que los gobiernos pos-Pinochet sacralizaron la apropiación del litio en manos de un yerno del Dictador que después se ha prodigado en donaciones a políticos y partidos.

A escala global se conoce la corrupción y los ingentes recursos acumulados por el exrey Juan Carlos que, por cierto, no devuelve y le sirven para mantener una institución tan ridícula y extemporánea como las monarquías. Son contados los gobiernos europeos que escapan hasta aquí de la lacra de la corrupción o se mantienen indemnes frente a sus grandes pecados, como su responsabilidad en el "calentamiento del Planeta", la industria severamente contaminante y los crímenes que se acometen ahora flagrantemente contra los emigrantes. Porque la Carta de DDHH de las Naciones Unidas se proclama, pero no se practica, por los países que la convinieron.

"Mal de muchos, consuelo de tontos" podríamos decir en Chile y otros países que recién se incorporan a los balances mundiales y regionales que miden y comparan nuestros niveles de corrupción. No podríamos reclamar tanta transparencia, cuando se sabe de los ilícitos cometidos por el propio Piñera para enriquecerse y llegar dos veces a la primera magistratura. Si además pensamos que los parlamentarios de forma transversal violan las leyes electorales y dilapidan recursos de propaganda, a sabiendas que jamás serán sancionados, por obra y gracia de los jueces venales y las normas de prescripción que alientan este tipo de delitos. Porque las leyes al respecto son especialmente complacientes con los políticos y grandes empresarios.

Así todo, existen muchos incautos electores que confían siempre en que cambien las cosas a partir de los próximos comicios y, de la mano de la desinformación programada y la ignorancia, hasta reelijan a los más corruptos. Por algo, algunos repiten: "no importa que me ataquen, lo grave sería realmente que me ignoraran".

Las cárceles latinoamericanas repletas de delincuentes comunes no tienen espacio para los delincuentes de "cuello y corbata", como se les reconoce. Y los militares asesinos y ladrones siguen en presidios de lujo comparados con los que encierran a los rateros y a los pobres que asaltan a transeúntes y propiedades y que muchas veces se ven obligados a delinquir, especialmente en tiempos de pandemia y desocupación.

Allí continúa en pie el Penal de Punta Peuco en Santiago y los jueces y fiscales "garantistas" la verdad es que se esmeran en otorgar libertades vigiladas, órdenes de arraigo, reclusiones domiciliarias y otros privilegios en favor de los que observan más acomodados o influyentes. Porque también se sabe que la carrera judicial en Estados Unidos, Chile y muchas naciones fervorosamente democráticas depende de los gobiernos y parlamentos de turno.

Delinquir bajo estas condiciones parece ser un buen negocio y eso tal vez explique la desmedida cantidad de candidatos que en abril próximo disputarán los cargos municipales, de la Convención Constituyente, los ediles y concejos municipales. En lo que será una "fiesta de la democracia" como habitualmente se acostumbra a calificar a estos procesos electorales.

Al grado que ahora se piensa extender a dos jornadas el sufragio para que los ciudadanos alcancen a desplegar en las urnas las numerosas y enormes papeletas para marcar sus preferencias. Aunque es muy probable que la abstención electoral vuelva a manifestarse contundentemente.

Es cosa de seguir comprobando los sueldos que percibirán todos estos nuevos "servidores públicos", si se los compara con el salario medio de los trabajadores chilenos o, incluso, con los que obtienen altos funcionarios políticos en países mucho más ricos que los nuestros. Por algo existe esta fiebre de candidaturas.

INDICADOR DE CORRUPCIÓN PARA AMERICA LATINA
CESLA–Julio 2020.
https://www.cesla.com/pdfs/Informe-de-corrupcion-en-Chile.pdf

EL COBRE DE CHILE: A NO REPETIR LA HISTORIA
Por Daniel Jadue
A 50 años de la nacionalización del cobre, ¡tenemos la oportunidad histórica de poner las riquezas del país al servicio del desarrollo nacional y asegurar un nuevo horizonte para las familias chilenas, que vaya que merecen un mejor vivir!

«El cobre por el cielo, la educación por el suelo» era la frase que las y los estudiantes repetían en las calles durante las movilizaciones del 2001. El cobre se empinaba sobre los US$ 4 la libra y las y los estudiantes tenían claro dónde estaban los recursos para financiar una buena educación. Ha pasado una década y las noticias que llegan sobre el precio del cobre nos indican que la realidad ha cambiado poco o nada.
Durante el "súper ciclo" de las materias primas entre 2005 y 2014, el país dejó pasar una oportunidad histórica. A pesar de que las rentas del metal rojo nos pertenecen a todas y todos, y que incluso la Constitución de la dictadura, esa que nos aprestamos a cambiar con todas las fuerzas de la historia, señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, gran parte de las rentas del cobre fueron a parar a manos de un puñado de grandes mineras privadas nacionales y extranjeras.

copyright © Resocal.se

De acuerdo con las investigaciones de los economistas Gino Sturla, Ramón López, Simón Accorsi y Eugenio Figueroa, el Estado regaló a privados recursos de enorme magnitud. Calculan que las rentas apropiadas en exceso por la gran minería privada fueron al menos US$11.400 millones cada año durante una década, equivalente a un cuarto del presupuesto del Gobierno. Estos montos alcanzarían, por ejemplo, para financiar el Ingreso Familiar de Emergencia equivalente a la línea de la pobreza.

La gran minería disfrutó de rentabilidades anuales que superaban el 70% del capital invertido, una bonanza inconcebible para cualquier otro sector, incluso en nuestra tan concentrada economía. Lo único que tuvieron que hacer fue sentarse a ver cómo subía el precio y aumentaban sus ganancias. De hecho, en el mismo período bajaba la productividad, aumentaba el subcontrato precarizado y se reducía aún más la proporción de cobre refinado (que pasa por una fundición y tiene casi 100% de pureza), mientras aumentaba la de concentrado de cobre (que no llega al 30% de pureza) y que lleva en su interior riquezas como oro y plata, que aumentan todavía más las rentabilidades del negocio para los privados.

Y esta situación se está repitiendo. Este jueves 25 de febrero, el cobre llegó a US$4,36 la libra, el precio más alto desde el 2011 y muy cerca del récord histórico. Diversos analistas estiman que probablemente nos encontramos al inicio de un "nuevo súper ciclo", ya que hay indicios de que el precio se mantendrá elevado. Mientras tanto, nada ha cambiado en nuestra legislación. Si dejamos las cosas tal como están, le daremos a la gran minería privada un nuevo gran regalo.

Recuperar el cobre para el beneficio de Chile y no de unos pocos es una tarea urgente.

La recaudación proveniente del cobre podría financiar desafíos económicos y sociales impostergables. Por lo mismo, hay que utilizar las rentas para desarrollar un cambio estructural que se hace imprescindible de cara al futuro: Limpiar, diversificar y agregar valor tecnológico a nuestra matriz productiva. La visión estratégica es terminar con el extractivismo y la dependencia de nuestros recursos naturales como palanca casi única de crecimiento, lo cual se ha demostrado estar agotado.

El diseño de un mecanismo para recuperar las rentas del cobre debe ser extremadamente riguroso. En primer lugar, la gran minería privada podrá obtener retornos al capital, acorde con los del resto de la economía. Ello mantendrá los incentivos para invertir, por ejemplo, en exploración y desarrollo de nuevos yacimientos.

En segundo lugar, es fundamental minimizar los espacios para la elusión y evasión tributaria. Investigadores como Jan Cademartori y Julián Alcayaga han documentado extensamente las prácticas de las grandes mineras en este sentido. En particular, las declaraciones de costos de las empresas son poco confiables y de muy difícil fiscalización, lo que permite que descuenten utilidades de manera artificial. Por ello es imprescindible aumentar las capacidades fiscalizadoras de las instituciones estatales relacionadas.

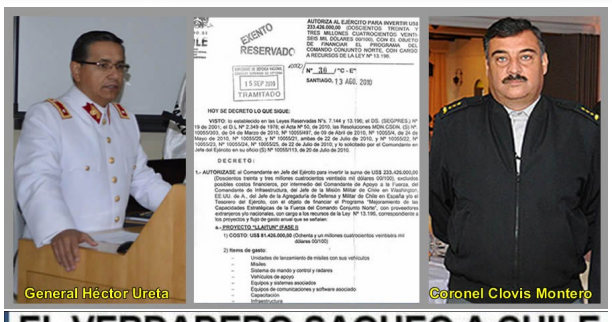
Entonces, resulta fundamental que la gran minería aumente sus aportes económicos al desarrollo nacional, a través de un verdadero royalty que hoy no existe (solo se aplica un impuesto específico que es de baja recaudación) y de un mecanismo que permita que el país pueda capturar las sobre ganancia que obtienen las empresas extranjeras producto de los ciclos de precios altos y de los diversos mecanismos de elusión tributaria que utilizan, tal como proponen López y Sturla.

Esos aportes económicos adicionales generados por la minería, además de aportar a la inversión social del Estado, deben financiar una estrategia robusta de ciencia y tecnologías que se proyecten más allá de la industria minera y que sirvan de base para un modelo de desarrollo no extractivista para Chile.

Paralelamente, se debe reformar nuestro sistema tributario de carácter general, incluyendo cambios que, entre otros aspectos, debe modificar el impuesto a la renta. Por lo tanto, el royalty, porcentajes de impuestos y otros aspectos de su diseño deben ir en la misma línea de dicha reforma tributaria.

Se debe considerar un porcentaje de impuesto sobre las ventas o la extracción no menor al 10%. Diversas estimaciones demuestran que al gravar las ventas por incluso más que un 10%, la gran minería privada seguirá disfrutando de rentabilidades por sobre el retorno normal al capital.
Además, esto sería equivalente al impuesto que paga Codelco para las Fuerzas Armadas, y que a pesar de contar con minas más antiguas y con una ley de mineral inferior en promedio a sus pares privadas, aporta al Estado dos tercios de la recaudación minera, mientras que solo un tercio de ésta proviene del aporte privado.

Cuando hablamos del cobre, no podemos olvidar el legado de los presidentes Frei Montalva y Allende Gossens, quienes pusieron al centro de su quehacer gubernamental el sentir ciudadano.
Ellos, decididamente, recuperaron el cobre para Chile y a 50 años de su nacionalización, tenemos la oportunidad histórica de poner las riquezas del país al servicio del desarrollo nacional y asegurar un nuevo horizonte para las familias chilenas que vaya que merecen un mejor vivir.



copyright © Resocal.se